

ÍNDICE AI: AFR 16/12/96/s

NO PUBLICAR ANTES DE LAS 00.01 HORAS GMT DEL 12 DE JUNIO DE 1996

BURUNDI: LOS GRUPOS ARMADOS MATAN SIN PIEDAD

Los grupos políticos armados que actúan en Burundi han matado deliberada y arbitrariamente a decenas de miles de hombres, mujeres y niños desarmados. Han violado y han infligido malos tratos de otro tipo a sus prisioneros, han destruido y saqueado propiedades y han provocado el desplazamiento de varios centenares de miles de personas. En 1996, los grupos armados extendieron sus ataques a las provincias de Bururi, Makamba y Rutana en el sur del país, con la consiguiente comisión de nuevos homicidios y saqueos, así como el aumento del número de refugiados y desplazados.

En un informe publicado hoy, Amnistía Internacional describe el desarrollo de los grupos armados en Burundi, aporta información detallada sobre los abusos contra los derechos humanos que comenten estos grupos e insta al gobierno burundés, a los líderes de los grupos armados, a los dirigentes políticos del país, a los gobiernos extranjeros y a las organizaciones intergubernamentales a que adopten medidas con el fin de acabar con esta matanza.

«Todos tienen la responsabilidad de poner fin a la matanza que se está cometiendo en Burundi. La mayoría de las víctimas son personas normales cuya única culpa era encontrarse en el lugar equivocado en el momento fatídico», ha afirmado la organización de derechos humanos.

En general, los grupos armados se han organizado según su origen étnico entre la mayoría hutu y la minoría tutsi. Sin embargo, a menudo es difícil establecer qué grupo ha cometido un determinado homicidio u otro tipo de abuso. Son muy pocas las ocasiones en que los grupos armados reivindican sus ataques contra civiles. La confusión aumenta cuando las fuerzas gubernamentales cometen violaciones de derechos humanos en la misma zona que los grupos armados y en el mismo periodo.

El 26 de octubre de 1995, soldados y civiles tutsis armados mataron deliberada y arbitrariamente al menos a 250 civiles hutus en el distrito de Tangara. El 5 de noviembre de 1995, bandas de tutsis mataron al menos a 14 civiles hutus desarmados, entre ellos un niño, en los alrededores del centro de salud de Mubanga, en el distrito de Mubanga. El 6 de diciembre de 1995, un grupo armado tutsi atacó un autobús que transportaba a civiles hutus en Cibitoke, cerca de Bujumbura, a donde volvían tras pasar varios meses ocultos en las colinas. El grupo tutsi mató al menos a siete personas e hirió a otras veinte. Al menos trescientas personas perdieron la vida a manos de soldados en el mercado de Kivyuka el 3 de mayo de 1996.

Al mismo tiempo, grupos armados hutus han matado a soldados del gobierno y a civiles tutsis, que en su mayoría se encontraban en campos para desplazados y habían agredido a opositores hutus. El 23 de febrero de 1996, 16 civiles perdieron la vida cuando los hutus atacaron Buanda, en la provincia de Citiboke. El 26 de febrero, 30 civiles más murieron y dos soldados resultaron heridos cuando una banda de hutus atacó un campo para desplazados y un puesto militar. Al día siguiente, el ejército burundés informó de que los rebeldes hutus habían matado a 46 personas en campos para desplazados de la provincia de Citiboke. Según los

2

informes, los rebeldes hutus mataron a 51 personas en el campo para desplazados de Butezidusti en mayo de 1996.

Los grupos armados también han atacado a extranjeros que en su mayoría trabajaban para organizaciones que prestan ayuda humanitaria. Han acusado a las organizaciones humanitarias extranjeras de apoyar a sus oponentes por distribuir alimentos, prestar cuidados médicos o por criticar los abusos contra los derechos humanos. Estos ataques no sólo han causado la muerte o lesiones al personal de estas organizaciones, sino que, además, han privado a los habitantes de Burundi de asistencia humanitaria de importancia vital.

Los periodistas también han sufrido los ataques de los grupos armados, al parecer por su trabajo de dar a conocer los abusos contra los derechos humanos. Vincent Francis, de nacionalidad sudafricana y director de la oficina de Johannesburgo de World Television News, murió en abril de 1995 a causa de las heridas de bala que le fueron causadas en una emboscada en el noroeste de Burundi. Su intérprete y conductor también perdió la vida en la emboscada. Numerosos periodistas hutus también han sido víctimas de homicidios.

Los grupos armados han asesinado a decenas de destacados ciudadanos de Burundi, al parecer con el fin de eliminar o intimidar a las personas con estudios o riquezas que pueden asumir funciones de liderazgo. Muchos eran políticos y funcionarios. Algunos de los asesinatos parecen deberse a que las víctimas denunciaron violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales.

En octubre de 1995, Bède Nzobonimpa, gobernador de la provincia de Ngozi, reveló que unos doscientos cincuenta civiles hutus habían muerto a manos de las fuerzas gubernamentales en el distrito de Tangara, en Ngozi. En diciembre, pistoleros no identificados mataron a Bède Nzobonimpa. En mayo de 1996, Sylvestre Mvuse, gobernador de la provincia de Citiboke perdió la vida en un control militar de una carretera tras denunciar la participación del ejército en el asesinato de Bibiane Ntamutumba, parlamentaria hutu, junto con toda su familia y al menos veinte personas más.

«Los jefes de los grupos armados debe dejar claro a sus miembros que no se tolerarán los ataques a civiles desarmados», ha afirmado Amnistía Internacional.

Los grupos armados no han sido los únicos autores de estas atrocidades. Los miembros de las fuerzas de seguridad y otros agentes del Estado han participado regularmente en abusos contra los derechos humanos o los han tolerado. Según la información recibida, muchos miembros de los grupos armados hutus que están presos en las cárceles de Burundi han sido ejecutados de forma ilegal. Otro motivo de preocupación es el hecho de que las autoridades gubernamentales han alentado la formación de grupos armados entre la comunidad tutsi.

En los pocos casos en que los jefes de los grupos armados tutsis han sido detenidos, se les ha recluido durante periodos breves y se les ha dejado en libertad sin cargos ni juicio. Sin embargo, las medidas adoptadas por el gobierno para impedir los abusos de los grupos armados tutsis son escasas y muy distantes en el tiempo, además de lograr pocos resultados.

«Este clima de impunidad favorece la comisión de nuevos abusos y aumenta el miedo de los hutus y los tutsis», ha asegurado Amnistía Internacional.

La organización destacó que este miedo no desaparecerá a menos que se ponga fin a los homicidios, comience la reconciliación y los autores de abusos contra los derechos humanos

respondan de sus actos. Todo diálogo o acuerdo entre los dos grupos debe incluir salvaguardias de derechos humanos, de forma que los derechos de los hutus y los tutsis están plenamente garantizados.